

Resistencias sociales en contra de los megaproyectos hídricos en América Latina

Anahí Gómez

El Colegio de Jalisco

Lucrecia Wagner

Universidad Nacional de Cuyo

Beatriz Torres

Universidad Veracruzana

Facundo Martín

Universidad Nacional de Cuyo

Facundo Rojas

Universidad Nacional de Cuyo

Abstract: Social resistance against hydraulic megaprojects in Latin America

This article contributes to the identification of certain common elements in the resistance to major water infrastructure projects in Latin America. To do this, we focus on the formation of Latin American networks of people affected by these projects and explore some particular cases that constitute clear examples of the diversity of existing networks. We describe the ways in which those affected respond to these mega projects, joining diverse social groups that accompany the struggles. In addition, we try to problematize the notion of ‘the affected’ and contrast it empirically with the chosen cases. *Keywords:* dams, Latin America, social resistance.

Resumen

Este trabajo pretende avanzar en la identificación de ciertos elementos comunes en las resistencias a los grandes proyectos de infraestructura hídrica en América Latina. Para ello, nos concentramos en la conformación de redes latinoamericanas de afectados y exploramos especialmente algunos casos que constituyen claros ejemplos de la diversidad de las redes existentes. Se describen las formas en que los afectados responden a estos megaproyectos, uniéndose a diversos grupos sociales que acompañan las luchas. Sumado a ello, procuramos problematizar la noción misma de ‘afectados’, y contrastarla empíricamente con los casos elegidos. *Palabras clave:* represas, Latinoamérica, resistencias sociales.

En memoria de Noé Vázquez Ortiz, integrante del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, asesinado el 2 de agosto de 2013, en Amatlán de los Reyes, México; Los niños David Eduardo Pacay Maas y Hageo Isaac Guitz, asesinados el 23 de agosto de 2013 en Monte Olivo, Alta Verapaz, Guatemala; y Nelson Giraldo Posada, integrante de Movimiento Ríos Vivos, asesinado el 17 de septiembre de 2013, en Ituango, Colombia.

Introducción

En América Latina se ha generado una diversidad de resistencias sociales a la instalación de megaproyectos hídricos. Estas luchas contra la construcción de represas han venido denunciando los impactos en los territorios, entre los que se destacan los desplazamientos de población. La oposición a estos megaproyectos ha estado nutrida de habitantes de localidades afectadas, colectivos ambientalistas y ecologistas, y diversas organizaciones no gubernamentales (ONGs), así como de académicos e intelectuales que acompañan las luchas de oposición, a nivel nacional e internacional.

Las represas se construyen con distintos fines, como pueden ser el regadío, el abastecimiento de agua potable, el control de avenidas y la hidroelectricidad. Particularmente la construcción de megaproyectos para la generación de energía eléctrica en América Latina se ha transformado en un tema estratégico, dada la creciente demanda energética asociada con el desarrollo económico. A pesar de tales distinciones con respecto a los propósitos específicos de determinadas represas, para los movimientos sociales en contra de los megaproyectos hídricos no ha sido tan importante entrar en una clasificación del fenómeno. Más bien, a través de sus redes, han puesto en su blanco la represa en sí como una modalidad de intervención humana en el medioambiente. Lo que nos interesa en el presente artículo es indagar en las redes y las estrategias de resistencia nacionales y regionales que han logrado problematizar la construcción de represas y el modelo de desarrollo asociado con ellas. Este modelo sustenta a los megaproyectos promovidos bajo una lógica de integración generada por proyectos regionales como la Integración de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá). Las redes que analizamos son una respuesta a estas ambiciones transnacionales, dentro de las cuales las represas figuran como pieza clave.

Las problemáticas denunciadas y las estrategias de resistencias a la construcción de megaproyectos hídricos presentan similitudes entre los países de la región latinoamericana. La manifestación de ciertos rasgos comunes en estas resistencias, en el sentido de caracterizar las formas de oposición por parte de los afectados y de diversos grupos sociales que acompañan las luchas, cobra importancia desde dos dimensiones. La primera evidencia un debate político sobre la instalación de megaproyectos hídricos que supera las fronteras entre determinados países, y que da lugar a diversas reacciones de las poblaciones

locales en colaboración, muchas veces con organizaciones de otros países. Por otro lado, desde el plano teórico – pero que también se materializa en las estrategias de resistencia – el análisis de la ampliación de la noción de afectados contribuye a dar cuenta de las motivaciones que dan lugar a la existencia de redes nacionales, bi-nacionales y regionales entre países. Ello nos ha llevado a plantear en este trabajo dos objetivos explícitos. El primero está centrado en problematizar la noción de quiénes son los afectados, reflexión que ha surgido dentro de las resistencias sociales anti-represas a nivel mundial, específicamente en América Latina. El segundo objetivo está enfocado en presentar algunas estrategias de organización a las cuales han recurrido los afectados a lo largo del continente, entre ellas, la vinculación a través de redes. Se describen así casos seleccionados a fin de comprender de manera empírica ciertas características centrales de las resistencias sociales anti-represas ante grandes proyectos con fuertes afectaciones.

¿Quiénes son los afectados? Afectados somos todos

A nivel internacional, pero de manera particular en los megaproyectos hídricos construidos entre las décadas de los 50s y los 90s en América Latina, la figura de los afectados estaba circunscrita a los dueños de tierras con título de propiedad que iban a ser inundados por un proyecto, sin reconocer la existencia de impactos ambientales, sociales y culturales. Este era el enfoque llamado patrimonial e hídrico (Vainer, 2008, p. 41-44).

Una práctica común ha sido reducir al máximo a quienes se les considera como ‘afectados’, y hacer una clasificación de directos e indirectos, limitando de este modo la interlocución y agencia social. De manera general se reconoce a los afectados directos como aquellas poblaciones que necesitarían ser reasentadas, mientras que los afectados indirectos, a pesar de no ser reubicados, tienen otros tipos de daños que alteran sus formas de supervivencia (Rights Action, 2005, p. 6). La mayoría de las estadísticas incluyen como afectados a las personas desplazadas por los embalses. En raras ocasiones se incluyen aquellas que han sido privadas de sus tierras y de su forma de vida a causa de otras etapas en la construcción de las represas o como consecuencia de los efectos ecológicos a largo plazo (McCully, 2004, p. 164). En el mejor de los escenarios, a los afectados directos se les relocizaba y en otros casos se les indemnizaba económicamente, con lo cual desde el supuesto patrimonialista se resolvía el problema legal. Sin embargo, no se tomaba en cuenta que al perder la tierra, se rompen los lazos comunitarios y se destruye la cultura de los pueblos (López, 2001, p. 273), en ocasiones llegando al etnocidio (Barabas y Bartolomé, 1992, p. 10).

Por otra parte, el ser afectado ‘indirecto’ no era de gran utilidad, ya que difícilmente eran reubicados o recompensados, a pesar de las alteraciones de sus formas de supervivencia (Rights Action, 2005, p. 6). Históricamente muchas comunidades que quedaron fuera del área de inundación no fueron consi-

deradas como afectadas, a pesar del riesgo latente de perder sus formas de sobrevivencia socioeconómica y cultural. Diversos pueblos cercanos a los ríos han visto mermada su capacidad de hacer usufructo de tierras comunes o de recursos asociados a ellas, como la pesca o la humedad que proporciona un caudal y han visto la destrucción total o parcial de los ecosistemas asociados a los ríos. En este sentido, la inundación de tierras y el cambio del ecosistema de los ríos – aguas arriba o aguas abajo de una represa – también afecta a los recursos disponibles en estas áreas, así como las actividades productivas en caso de las comunidades que dependen de la tierra y los recursos naturales (Vainer, 2008, p. 49).

La Comisión Mundial de Represas (CMR) en su informe final publicado en el 2000, reportó entre 40 y 80 millones de desplazados (CMR, 2000, p. 30). Esta cifra inexacta del número real y total refleja una invisibilidad de las víctimas y de los impactos generados. Desde las conclusiones de la CMR, quedó demostrado que las afectaciones ambientales y socioculturales de los megaproyectos hídricos van más allá de la zona de embalse. Por lo tanto, a nivel mundial el número de personas afectadas por megaproyectos hídricos se ha subestimado, debido a que no existen datos que puedan dar cuenta de quienes no fueron considerados dentro de las afectaciones (CMR, 2000, p. 240). Aunado a que históricamente no se cuenta con una cifra que dé cuenta del número de afectados por represas, resulta importante reconocer que actualmente no existe información consolidada acerca de la cantidad de proyectos de grandes represas en operación, construcción o planeación en el mundo. Tampoco es clara la identificación de la cantidad de personas que resultarían afectadas, debido a que los gobiernos y las instituciones internacionales carecen de información disponible al público y por lo tanto, no existe un cálculo exacto (AIDA, 2009, p. 3). De tal manera, que al no contar con el acceso a datos puntuales, pareciera que al menos numéricamente, la invisibilidad de los afectados está destinada a continuar.

Por otra parte, la construcción de megaproyectos hídricos, con sus correspondientes afectaciones e impactos, no siempre genera como consecuencia la organización y la resistencia. La gestación de una oposición social, históricamente está ligada a los contextos sociopolíticos de cada región o país, a las capacidades organizativas y a los medios estratégicos de los que se dispongan. Sin embargo, la construcción social de la figura de los afectados y el reconocimiento de que las afectaciones van más allá de la zona del embalse, se ha convertido en un tema transversal que ha conglomerado a diferentes resistencias, generando redes de afectados en contra de los megaproyectos hídricos.

Las luchas en contra de la construcción de represas a nivel mundial han avanzado sustancialmente en relación al tema de los afectados. A nivel simbólico y considerando una amplia visión de cuenca, gran parte de los movimientos de resistencia han adoptado como una de sus banderas de lucha el lema de ‘Todos somos afectados’. Actualmente existe una articulación de un amplio movimiento mundial bajo esta concepción de afectados. Se trata de luchas que

no son sólo en contra de la construcción de un megaproyecto específico, sino que cuestionan la política hídrica mundial y rechazan el paradigma de gestión del agua vigente que atenta contra del medio ambiente, los territorios, las culturas, las formas de vida y los derechos humanos de los afectados (McCully, 2004, pp. 339-40).

En relación a la figura de los afectados se pueden reconocer algunos avances fruto de acciones a nivel mundial. Un ejemplo se encuentra en el manual elaborado por la Corporación Financiera Internacional (CFI), perteneciente al grupo del Banco Mundial (BM), para orientar los ‘reaseñalamientos involuntarios’ de proyectos. En este manual se describe que existen desplazamientos físicos, relacionados con la pérdida de la vivienda y desplazamientos económicos donde las personas pierden o ven limitado su acceso a bienes productivos (agua, tierra y bosques) de manera temporal o permanente a causa de la construcción o el funcionamiento de un proyecto o de sus instalaciones asociadas (CFI, 2002, pp. ix, xi, 6).

Asimismo, el concepto de afectados ha cambiado en cierta medida debido a la ampliación de los derechos humanos, es decir, pasar de los derechos civiles básicos a la incorporación de los derechos económicos, sociales, culturales e indígenas, y más recientemente del medio ambiente (Vainer, 2008, p. 41). Esta ampliación ha implicado que en la actualidad las afectaciones incluyan el medio ambiente, el entorno social y el patrimonio histórico y cultural, así como la consulta libre e informada, en especial si se trata de pueblos indígenas. De tal manera que los procesos de lucha han ido consolidando la definición sobre quiénes deben considerarse afectados. En Brasil, la Comisión Especial de Afectados por Presas del Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), afirma que diversos estudios de caso permiten concluir que el modelo actual de instalación de represas ha generado graves violaciones de los derechos humanos de forma recurrente, cuyas consecuencias terminan acentuando las desigualdades sociales ya de por sí graves, lo cual se traduce en situaciones de pobreza y desintegración social, familiar y del individuo (MAB, 2013, pp. 10, 18).

El Movimiento de Afectados por las Represas en Brasil (MAB, por sus siglas en portugués), se ha movilizado para la creación de una política pública nacional para el reconocimiento de los derechos de los afectados por represas. Dicha propuesta construida en el marco y a lo largo de los Congresos Nacionales del MAB, plantea un cuestionamiento central a lo que debiera definirse y considerarse como afectados por los megaproyectos hídricos. Este planteamiento es amplio en términos territoriales y no restringe los impactos a la zona inundada, sino que reconoce las afectaciones aguas abajo de las represas, con relación a la pérdida de la posesión o tenencia de la tierra, de capacidades productivas, del acceso a recursos naturales, así como de fuentes de ingreso. Esta caracterización de afectaciones es un gran avance, ya que va más allá de un título de propiedad y pone énfasis en cuestiones productivas y económicas,

además de reconocer afectaciones negativas en la forma de vida de las comunidades donde se realizan los reasentamientos (MAB, 2013, p. 20).

El MAB ha trabajado arduamente por etapas, en principio reconociendo que las comunidades locales que se verían afectadas por los proyectos carecen de información sobre los posibles impactos ambientales y sociales, con lo cual surgió la necesidad de construir declaraciones de impacto ambiental en lenguajes técnicos, pero de fácil entendimiento para los afectados, con lo cual se pretendía generar además empoderamiento y organización de las propias comunidades, para posteriormente promover las audiencias públicas, con el propósito de lograr debates importantes entre los promotores de los proyectos y los afectados (Rothman, 2001, pp. 336-37).

Las resistencias de afectados por megaproyectos hídricos a nivel mundial y en América Latina, han puesto la piedra angular en el tema del reconocimiento de las afectaciones, así como en la lucha por impedir que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos. La articulación en redes por países y por regiones ha sido posible gracias a que los conflictos se han visibilizado y que las luchas se han articulado en un movimiento social más amplio, desde el cual se ha generado conciencia de las afectaciones generalizadas y del concepto de que todos somos afectados. Sin embargo, a pesar de que estratégicamente y colectivamente se ha trabajado sobre estos puntos, la evaluación de las afectaciones se continúa realizando sin contemplar cabalmente los impactos socio-culturales y ambientales de los proyectos de represas. Todavía existe un gran camino por recorrer respecto a la configuración y reconocimiento por parte de los gobiernos sobre quiénes y cómo son afectados por un megaproyecto hídrico.

Más recientemente, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en un informe publicado en el 2009, realizó un recuento de las más importantes violaciones al ordenamiento internacional por la construcción de represas en el continente americano, especialmente en América Latina. En el documento se identifican siete violaciones: a) daños irreversibles a las comunidades por afectación al derecho a un ambiente sano; b) desplazamiento forzado y falta de planes de reubicación; c) ausencia de evaluaciones de impactos ambientales y sociales, integrales y previas a los proyectos; d) falta de consulta previa y participación pública, adecuada, oportuna, e integral; e) violaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales; f) falta de acceso a la información y justicia; y g) criminalización de la protesta. Como recomendación en el informe se dice que antes de decidir acerca de la implementación de los proyectos es necesario evaluar a fondo y de manera integral si en realidad la construcción de represas es la mejor y única solución para atender necesidades (AIDA, 2009, pp. 22, 99). La figura de los afectados con el reconocimiento de violaciones a través del informe de la CMR y en este caso de AIDA, también ha significado avances importantes que abonan a las luchas y resistencias que día a día se dan desde las comunidades afectadas.

Redes de resistencia contra megaproyectos hídricos

Desde mediados de la década de 1980, organizaciones sociales como International Rivers formaron parte de lo que se puede reconocer como el nacimiento de las resistencias sociales organizadas en contra de la construcción de represas a nivel internacional, conformado por numerosas comunidades indígenas y campesinas, ambientalistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales de diversos países. Durante la década de 1990, la organización social de afectados por represas impulsó ante el BM la iniciativa de crear una comisión internacional e independiente para revisar los impactos en proyectos en los que había participado dicho organismo. Fue entonces cuando se conformó la CMR (McCully, 2004, pp. xxii-xxiii).

De las actividades en torno a la CMR, surgió la iniciativa para realizar en 1997 el primer Encuentro Internacional de Afectados por las Represas y sus Aliados, en Curitiba, Brasil (McCully, 2004, p. xxiii). A partir de esta primera reunión y de la posterior publicación del informe final de la CMR en el 2000, la organización a nivel internacional comenzó a impulsar resistencias por países y por regiones. Las conclusiones de la CMR y la voluntad social organizativa alrededor de ella, fueron claves para la consolidación de movimientos anti-represas. En América Latina, sin duda, el primer impulso fue dado por el MAB, el cual se creó en 1991 en un encuentro nacional en Brasilia (McCully, 2004, p. 357). El MAB representa uno de los ejemplos más importantes de la organización en redes a nivel de los países. Bajo el lema ‘Agua y energía no son mercancías!’ el MAB comenzó a organizar a los afectados por la construcción de represas hidroeléctricas a fines de la década de 1970, durante la dictadura militar, cuando se retiraron todos los derechos civiles y políticos.

Como una de las primeras acciones reivindicativas del MAB, producto de su primer encuentro, se instauró el 14 de marzo como el Día Mundial de Lucha Contra las Represas. Actualmente es un movimiento reivindicatorio y político de nivel nacional con presencia en 16 estados de Brasil. La estrategia política del MAB se viene concentrando en torno a los ‘derechos de los afectados’. Es por eso que, dada la imposición de la construcción de las represas, se busca garantizar el cumplimiento de las medidas mitigatorias de los impactos que provocan los emprendimientos. Ejemplo de estas medidas es la construcción de infraestructura como hospitales y escuelas que deben ser localizados en las zonas de afectación de las obras. La principal reivindicación actual del MAB refrendada en su Encuentro Nacional de 2013, es la creación por parte del gobierno nacional de una Política Nacional de Derechos de los Afectados, la cual deberá estar basada en reconocer que las hidroeléctricas a pesar de ser la principal forma de generación de energía en el país, no cuentan con un marco legal que asegure los derechos de los afectados.

El MAB a lo largo de los años ha construido y moldeado una diversidad de estrategias, que a su vez han influido en cierta medida en la estructura política preexistente en Brasil. Particularmente la organización en red con la participa-

ción de diversos sectores de la sociedad, como la iglesia, la universidad, los sindicatos, los activistas ambientales y las poblaciones rurales afectadas por las represas han conformado un interesante movimiento que ha sido participe de los procesos democratizadores en Brasil y que de alguna manera han influido en el marco normativo e institucional para que contemple las evaluaciones de impacto ambiental en el caso de las represas (Rothman, 2001, p. 336). El trabajo del MAB, como en muchos otros movimientos, se ha basado en el capital social preexistente, es decir, sobre la base de la familia y el parentesco en las comunidades, en donde se rescatan las conexiones y la solidaridad social dentro y fuera, con la creación de alianzas y vínculos intersectoriales para el apoyo rural y urbano (Rothman 2001, 340).

Posteriormente al nacimiento del MAB y bajo el impulso de su organización, en 1999, mientras se hacía una revisión de las conclusiones de la CMR en diferentes países, se realizó una consulta regional al respecto en la ciudad brasileña de São Paulo, a la que fueron convocados varios países de América Latina. En esta reunión se puede reconocer el surgimiento de la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR) (Castro, 2006, p. 159). La REDLAR surgió con la presencia de representantes de movimientos de doce países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay. Actualmente, también están presentes Belice, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Está compuesta por más de 250 miembros de organizaciones sociales, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres, redes, frentes, y movimientos de 19 países de América Latina (REDLAR, 2014).

Desde los esfuerzos promovidos por los movimientos y las ONGs, se fueron creando iniciativas de organizaciones locales, nacionales y regionales entre países. En el 2002, a propósito de la presentación del informe de la CMR, se realizó el II Encuentro de la REDLAR en Posadas, Argentina. El III fue en el 2005 en Guatemala, el IV en Colombia en el 2008 y el V en octubre de 2013 en Guatemala. A la par de la organización a través de la REDLAR surgieron otras iniciativas, como el Movimiento Mesoamericano contra las Represas, el cual se reunió por primera vez en el 2002 en Guatemala. El siguiente año se volvió a reunir en Honduras (2003). Dos encuentros posteriores fueron en El Salvador (2004 y 2007). También hubo reuniones que se organizaron conjuntamente con la REDLAR (Panamá-2009 y Costa Rica-2011). Hasta mediados del 2014, se habían realizado tres Encuentros Internacionales de Afectados por Represas y sus Aliados, cinco encuentros latinoamericanos de la REDLAR, y seis encuentros del Movimiento Mesoamericano contra las Represas. La organización por regiones y por países ha significado un esfuerzo constante y paulatino de consolidar la oposición y la defensa más allá de las fronteras. De alguna manera el uso de internet, y de las redes sociales, ha facilitado la construcción de una ‘sociedad civil global’ enfocada a las afectaciones por las

Tabla 1. Redes de movimientos y resistencias a proyectos hídricos y represas

| Año y lugar de nacimiento | Organización | Países |
|-----------------------------------|--|--|
| 1991 Brasilia | Movimiento de Afectados por Represas (MAB) | Brasil |
| Mediados de la década de 1990 | Federación de Afectados por Yacyretá de Itapúa y Misiones (FEDAYIM); Asamblea Binacional de Afectados de Yacyretá | Argentina y Paraguay |
| 1994 São Paulo | Coalición Ríos Vivos | Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina y Paraguay |
| 1999 São Paulo | Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR) | Doce países de América Latina |
| 1999-2006 | Coordinadora Campesina Contra los Embalses | Panamá |
| 2002 Petén | Frente Petenero contra las Represas | Guatemala |
| 2004 Aguas Calientes; Guerrero | Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) | México |
| 2005 Petén | Frente Guatemalteco de Afectados y Amenazados por Represas y Defensa del Agua | Guatemala |
| 2006 Coyhaique | Patagonia sin represas; Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena (CDP) | Chile |
| 2006 Norte del Cauca | Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas y Trasvases | Colombia |
| 2006 | Red de Afectados por Represas Hidroeléctricas y en Defensa de los Ríos en Panamá | Panamá |
| 2006 | Movimiento de afectados por represas El Salvador (MONARES) | El Salvador |
| 2011 La Playa; Santander | Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas 'Ríos Vivos' | Colombia |
| 2013 | Movimiento Ríos Vivos | Costa Rica |

Tabla de elaboración propia con base en diversas páginas electrónicas.

represas, la cual se ha manifestado en la consolidación de un movimiento transnacional, creando y consolidando vínculos entre ONGs y comunidades afectadas y dando a conocer a nivel internacional las diferentes afectaciones y organizaciones (Carruthers, 1996, p. 1020).

Producto de las reuniones internacionales y de la consolidación de una estrategia más amplia, se ha posibilitado y alentado la conformación de una serie de organizaciones y redes locales y nacionales. En la Tabla 1 se muestran de manera cronológica las redes de organizaciones de afectados que se han gestado en los diferentes países. Se dejan fuera aquellos países en donde no se localizó alguna iniciativa organizativa que pudiera reflejar una articulación nacional. En el caso de Argentina y Paraguay se tomó en cuenta porque comparten la afectación a un mismo territorio más allá de las fronteras geográficas y por resultar un ejemplo muy particular de organización binacional. En este esfuerzo de organización entre países, también es importante mencionar a la Coalición Ríos Vivos, la cual fue fundada en 1994 con sede en Brasil, pero con trabajo en varios países. Son opositores al proyecto de la hidrovía Paraguay-Paraná, que involucra a Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina y Paraguay. Existen otros casos como el de Honduras, en donde la lucha en contra de las represas se ha realizado a través de organizaciones más amplias como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), desde donde se articulan diferentes luchas sociales dentro de este país.

Además del MAB, otro caso que puede ser tomado de manera particular como ejemplo de una red a nivel país debido a la importancia de su estrategia de articulación y alcance, es el MAPDER, el cual agrupa a la mayoría de los conflictos por proyectos y por construcción de represas en México, además de que tiene una significativa vinculación a las luchas mesoamericanas y latinoamericanas anti-represas. El MAPDER surgió en 2004 en un momento en el que muchas de las represas en México estaban cumpliendo la proyección de vida útil de 50 años, y en donde el gobierno estaba impulsando la construcción de una nueva generación de infraestructura hídrica, con importante presencia de inversión extranjera. Acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Plan Puebla Panamá, y los tratados de libre comercio con la Unión Europea, en México y en varios países de América Latina, estaban imponiendo las bases para una gestión del agua bajo un modelo neoliberal (Castro, 2004).

El MAPDER fue producto de la organización de la sociedad civil vinculada con grupos indígenas y campesinos, que bajo un modelo de desarrollo sistemáticamente han estado siendo despojados de su territorio y han sido objeto de diversos impactos sociales ambientales en sus comunidades (Carruthers, 1996, p. 1007). En el MAPDER podemos reconocer tres formas de adscripción: grupos de base, es decir, comunidades directamente afectadas por proyectos de represas; organizaciones intermediarias o también reconocidas como ONGs, las cuales se identifican como las entidades cívicas orientadas a la proporción

de servicios para canalizar los recursos a las organizaciones de base; y los intelectuales orgánicos, quienes en ocasiones desarrollan investigación científica y elaboración de documentos públicos, ayudando a construir una base de argumentos sólidos que son de utilidad para los movimientos (Carruthers, 1996, pp. 1018-19).

Con una base de organización en la que se involucraron diversas ONGs e intelectuales orgánicos, en el MAPDER se establecieron las conexiones entre lo rural y lo urbano, así como los vínculos con otros sectores de la población y de la sociedad civil que en diferentes ocasiones han servido de apoyo a comunidades afectadas que por ser pequeñas o alejadas han necesitado consolidar su lucha dentro de una estrategia en red. A partir de esta forma de organización y del encuentro fundacional del MAPDER, se empezaron a hacer recuentos de todas aquellas represas que se han construido en México, así como de los impactos y las consecuencias que han traído para las poblaciones afectadas, incluyendo promesas incumplidas, acciones corruptas, reubicaciones injustas e imposición de proyectos. De esta manera, además de generar un recuento histórico, se actualizaron los conflictos y se buscó la organización y la incorporación al MAPDER de todas aquellas luchas que habían trabajado de manera aislada y sin mucha fuerza (Castro, 2004).

El X aniversario del MAPDER se realizó en Amatlán de los Reyes, Veracruz en agosto del 2013, donde la organización anfitriona, el colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, se opone desde el 2011 al proyecto hidroeléctrico El Naranjal, de capital privado (360 Megawatts). A horas de empezar el evento, Noé Vázquez Ortiz, encargado de realizar un ritual de bienvenida por parte de la organización anfitriona, fue brutalmente asesinado. La muerte de este joven activista de 27 años fue interpretada como una señal de intimidación no sólo para el colectivo Defensa Verde, sino también para el MAPDER.

Afectados y resistencias

Luego de avanzar en el análisis de la ampliación de la noción de afectados, y su materialización en redes de carácter nacional, como es el caso del MAB y del MAPDER, es importante abordar ejemplos más variados de resistencias en diferentes países, dando cuenta tanto de los aspectos en común, como de la diversidad. Algunas características las podemos encontrar en las redes antes descritas, mientras que otros aspectos dan cuenta de resistencias locales que tienen como característica la alianza con otras organizaciones, pero que no han dado lugar a la conformación de frentes de oposición a niveles regionales o nacionales.

En este apartado abordamos las principales estrategias de lucha, así como puntos de conflicto y ciertas características relevantes para comprender los modos en que los afectados han respondido en las distintas experiencias estudiadas. Además, en algunos casos son contrastantes la repercusión y violencia que han tomado estas resistencias en México y Brasil, en relación con lo que ha

sucedido en Argentina, donde el conflicto socio-ambiental (y la represión por ejemplo) ha estado enfocado en otras problemáticas.

Para México se abordan dos casos que son emblemáticos debido a su trascendencia para la resistencia a nivel nacional. El primer caso es la presa de La Parota en el estado de Guerrero. Se trata de un proyecto gubernamental, promovido sobre el río Papagayo, para la generación de hidroelectricidad. La organización generada para la resistencia es el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), el cual se reconoce como una de las primeras organizaciones que dieron el impulso para la conformación del MAPDER en el 2004. La resistencia en contra de La Parota, además es reconocida en México como una las luchas más emblemáticas dentro de la última década, debido a la determinación con la que se ha llevado la oposición, ya que desde el 2003 comuneros y ejidatarios, han permanecido apostados día y noche en vigilia en puntos estratégicos dentro de su territorio, con lo cual han logrado detener el inicio de la obra e impedir con ello la construcción de la presa. En contraparte, los opositores a La Parota han sido objeto de la criminalización de su lucha. El último acto de intimidación para el movimiento fue el 17 de junio del 2014, cuando Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero y líder de la CECOP, fue detenido con violencia y trasladado inmediatamente a un penal de máxima seguridad, acusado de diversos delitos relacionados con su participación como activista.

Otro caso en México es El Zapotillo, en el estado de Jalisco, la cual es una presa que se promueve desde el 2005 sobre el río Verde. El principal foco de resistencia se ha generado en Temacapulín, uno de los tres pueblos que resultarían inundados por el embalse. Desde el inicio de la construcción de la presa en el 2007, se conformó el ‘Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo’, y la lucha se vinculó con ONGs y redes de afectados como el MAPDER y la REDLAR. A pesar de ser pocos los habitantes de Temacapulín, se han realizado diversas acciones colectivas no violentas, manifestaciones, plantones, marchas, caravanas, llamados través de las redes sociales y toma de instalaciones. Desde la defensa legal, se han realizado juicios de amparo y de nulidad administrativa. Al igual que los opositores a la presa de La Parota, han interpuesto quejas ante instancias nacionales e internacionales de carácter ético como el Tribunal Latinoamericano del Agua y el Tribunal Permanente de los Pueblos. La presa El Zapotillo en México es reconocida como emblemática debido a que ha sido una lucha de David contra Goliat, en donde las llamadas minorías se han enfrentado en condiciones de total desigualdad ante el poder del Estado mexicano.

Hasta aquí podemos comenzar a elaborar un recuento de lo que pudieran ser elementos para el análisis, desde el caso mexicano, para continuar con la presentación de luchas en otra parte de Latinoamérica, específicamente en su cono sur. Los casos aquí mencionados proporcionan interesantes puntos en común – dados incluso por la pertenencia a redes latinoamericanas con sedes de encuentro en estos países – y diversidades organizativas, como la existencia de frentes

y movimientos nacionales y regionales de afectados y de conflictos latentes. Las resistencias conformadas se articulan a quienes resisten a otros megaproyectos a nivel nacional, y se unen a su vez con redes de afectados por megaproyectos hídricos de carácter continental. A su vez, se trata de países con gobiernos enmarcados en diferentes lineamientos políticos, algunos que han firmado tratados de libre comercio, y otros que representan gobiernos de carácter más progresistas acompañados de tintes desarrollistas. También son países con diferentes realidades en cuanto a la 'violencia permitida'. Se observa que en algunos casos de México, como en Guatemala, las muertes, las persecuciones y los encarcelamientos en estos conflictos se han acrecentado con el paso del tiempo, mientras que en Argentina, si bien ha habido represión y otros efectos sociales relacionados con la llegada de estos proyectos, no se cuentan muertos entre quienes los resisten. En el caso guatemalteco, una de las presas que más sangre costó en Latinoamérica es Chixoy, donde al menos 369 indígenas mayas, en gran parte mujeres y niños, fueron cruelmente asesinados. Esta presa fue financiada en parte por el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes han guardado silencio sistemático ante estas masacres (McCully, 2004, pp. 87-90).

Si bien en Argentina gran parte de los proyectos que han generado las mayores reacciones de oposición se desarrollan o están proyectados sobre ríos compartidos con otros países, las mayores resistencias existentes están nucleadas con otro tipo de megaproyectos, como la megaminería y el monocultivo de soja. Además, una crítica recurrente a los megaproyectos que se planifican a nivel gubernamental es la posibilidad de generar impactos acumulativos – ocasionados por más de una represa – sobre el mismo río. Es un país que presenta una creciente conflictividad socioambiental, que ha propiciado al encuentro y coordinación nacional de diversas organizaciones socioambientales, como la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), donde la mayor parte de los grupos (y redes) que la conforman están abocados a luchar en contra de proyectos megamineros y de agronegocios, a los que se suman luchas contra los desalojos por el avance de la frontera agrícola y contra los impactos de industrias contaminantes, entre otras. Respecto a los megaproyectos hídricos, si bien no hay un frente nacional, los grupos de afectados se han vinculado con redes existentes a nivel latinoamericano, participando de algunos encuentros de la UAC y ciertos conflictos (Yaciretá, Corpus Christi, Garabí, y algunos de la región patagónica), han tenido trascendencia mediática y continuidad en el tiempo.

La convergencia de las resistencias a megaproyectos hídricos con otras luchas, como se evidencia en espacios como la UAC en Argentina, se produce en gran parte porque estos proyectos comparten los cuestionamientos existentes para la minería o grandes obras de infraestructura, entre otros, por ejemplo: la generación de impactos sociales y ambientales de gran magnitud, que pueden modificar el entramado productivo ya existente; la desigual distribución de los beneficios económicos; las incertidumbres sobre el destino del 'producto' (energía, minerales: ¿para qué? ¿para quiénes?). En este sentido, si bien estas

actividades se presentan como generadoras de mano de obra, se cuestiona también la posibilidad laboral a corto plazo y las desigualdades en cuanto a la formación necesaria para ocupar determinados cargos, considerando que la población local será contratada para realizar las tareas de mayor esfuerzo, y que algunas represas, como es el caso de Yacyretá, han sido cuestionadas por la corrupción en torno a las obras. Todo ello sin evaluarse la pérdida potencial de aprovechamientos económicos, turísticos, y recreativos de los recursos naturales que serán inundados o destruidos. Yacyretá puso de manifiesto una acción convergente entre, por lo menos, organizaciones ambientalistas y población afectada (Arach, 2002, p. 8), que denunció varios aspectos negativos de la obra, como falta de cumplimiento en la relocalización, pérdida de fuentes de trabajo, cuestionamiento al destino de la energía generada, y daños ambientales.

En cuanto a los actores implicados en la resistencia, Yacyretá constituye para Omar Arach un ejemplo de lo que Margaret Keck y Kathrin Sikkink (1998) denominan ‘redes transnacionales de abogacía’. Las cuales son entendidas como las formas de organización recíproca y voluntaria de manera horizontal establecidas entre actores diversos y distantes movilizados detrás de un objetivo común (Arach, 2002, p. 8). Este proceso organizativo en el caso de Yacyretá, ejemplifica lo planteado al inicio del trabajo, en cuanto a la ampliación de la noción de afectados, y la articulación de los ‘afectados directos’ con otras organizaciones que suman otros cuestionamientos a los proyectos. En la resistencia a la represa de Yacyretá, los afectados directos iniciaron demandas vinculadas a las indemnizaciones por las pérdidas o al incumplimiento de las promesas derivadas de la relocalización. Se llevaron a cabo manifestaciones, como la que se realizó en el 2007 en Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales (*Página 12*, 2007). Ya en el año 2006 se registraron bloqueos carreteros en Posadas-Misiones (provincia donde se instalaría el proyecto) sobre el puente internacional que une Argentina con Paraguay, para reclamar indemnizaciones al Ente Binacional Yacyretá (EBY) (*La Nación*, 2006). La problemática compartida de ambos lados del río Paraná favoreció la conformación del ‘Movimiento Binacional de Afectados por Yacyretá’.

Un hito en la resistencia a proyectos hídricos, paradójicamente poco visibilizado en relación a otros procesos de conflictividad socioambiental en Argentina, fue la realización de un referéndum, en torno a otro proyecto binacional argentino-paraguayo: Corpus Christi. En 1996, el conflicto suscitado en torno a este proyecto desembocó en la realización de esta consulta, donde la población votante manifestó en un 88,63 por ciento el rechazo a la construcción de la represa (Bregagnolo 2002). Paradójicamente, en los estudios sobre conflictividad socioambiental en Argentina, siempre se destaca como consulta popular la acontecida en 2003, resultante de la resistencia a un proyecto minero de oro en Esquel, en la Patagonia, pero se desconoce que siete años antes ya había acontecido la experiencia de referéndum en relación a un megaproyecto hídrico. Ello manifiesta la escasa visibilización que las resistencias a megaproyectos hídricos han tenido en este país, a diferencia de otras generadas por otros me-

gaproyectos. Asimismo, también es relevante mencionar la escasa información disponible sobre las acciones llevadas a cabo conjuntamente por afectados de ambos países, ya que la escasa información disponible se encuentra desagregada por naciones, o se dispone de más información sobre las resistencias en un país que en el otro.

Entre Argentina y Brasil se planifica otro proyecto hídrico que ha generado campañas en su contra: Garabí. Este proyecto suele vincularse a Yacyretá, porque la provincia argentina afectada también es Misiones. Se introduce este caso para hacer referencia a la alusión de los impactos acumulativos, como uno de los principales cuestionamientos a la instalación de nuevas presas en ríos que ya tienen este tipo de obras. Por ejemplo, entre los debates en torno al proyecto, un sacerdote jesuita de dicha provincia, Monseñor Joaquín Piña, lamentó que ‘los misioneros “no aprendimos la lección de Yacyretá”’ (*No a Garabí*, 2010). En torno al caso Garabí, promocionado desde los 70, quienes rechazan la obra también impulsan la realización de un plebiscito, que aún no ha sido aprobado. Al efecto, se ha organizado la ‘Mesa coordinadora por Garabí’.

Esta referencia previa al caso de Yacyretá también ocurrió en el conflicto por el proyecto Corpus Christi, el cual fue esgrimido como ‘un segundo Yacyretá’, buscando vincular el nuevo proyecto con una situación crítica ya vivida, a fin de que se reflexione en relación a los impactos acumulativos y a las promesas incumplidas de un proyecto hídrico ya existente. A ello se suman las experiencias previas de las propias organizaciones ambientales, por ejemplo, aquellas de la provincia de Misiones que rechazaron el proyecto de Corpus Christi, que ya habían participado del rechazo de la represa Urugua-í, construida sobre el río homónimo, en Misiones, a inicios de 1990. Otro ejemplo en este sentido está vinculado también a las repetidas intenciones de reactivar el proyecto Corpus en los últimos años, donde a otros argumentos de quienes lo rechazan invocan que ‘Misiones ya decidió’, como frase que ha circulado en muchas negativas a Corpus.

Otro importante territorio de resistencia a proyectos hídricos lo constituye la Patagonia, tanto argentina como chilena, en la que el accionar de comunidades indígenas mapuche ha sido relevante. Se puede mencionar el proyecto El Portón sobre los ríos Puelo y Manso (Décima Región en Chile y provincia de Chubut en Argentina), que aún sigue en fase de proyecto. En varios de estos conflictos han existido protestas de otros agentes, como ONGs, vecinos, asambleas e intelectuales, además de la ya mencionada población indígena. En el caso del proyecto El Portón, a estos actores se han sumado autoridades políticas locales, periodistas locales y de Buenos Aires.

Esta región es un excelente ejemplo de la importancia de las redes internacionales para visibilizar casos puntuales de resistencia. En el caso de este proyecto, se encuentra el caso de Futalefú Riverkeeper, apoyada por Waterkeeper Alliance de EEUU. Como ya se mencionó, entre los actores nacionales se destacó el alto consenso que tomó la protesta en localidades como el Bolsón (Argentina), donde las autoridades políticas locales y periodistas (locales y de

Buenos Aires, como Sergio Elguezabal, que conduce un reconocido programa de alcance nacional sobre temas de ecología), y gran número de vecinos encabezaron manifestaciones en contra del proyecto, como la realizada en Lago Puelo. Esta lucha se asentó sobre el argumento de la ‘sismicidad inducida’ que produciría el embalse por encontrarse sobre una falla geológica. Además de este caso, en la Patagonia argentina existen otros, como Chihuido I y II, en Neuquén, y La Barrancosa-Cóndor Cliff, sobre el río Santa Cruz, el cual sería la mayor obra energética del país (*La Nación*, 2013), que presentan características similares. Se cuestiona, entre otros aspectos, el daño ecológico y el destino de la energía generada.

La heterogeneidad social que caracteriza a las resistencias a megaproyectos, contribuye a esta sumatoria de conocimientos y saberes, y explica la amplitud, la diversidad y complejidad de las articulaciones entre discursos y acciones colectivas. En este sentido, Dimitriu (2002) refiere a las heterogéneas redes que se construyen a partir de la oposición a la construcción de represas en Patagonia argentina (segunda angostura del río Limay, Valle de Epuypén, río Corcovado): ‘Todas remiten a una red conformada por un variado espectro de personas y organizaciones, con ideologías y experiencias dispares, que viven en la región y han logrado mantener o establecer fuertes vínculos nacionales e internacionales precisamente por sus variados orígenes, formación, trabajo, y por el contacto con viajeros’ (Dimitriu, 2002, p. 19).

Además de las resistencias en Argentina y Chile, donde se destaca la llevada adelante contra el proyecto Hidroaysén, también Brasil se destaca en la región por su red nacional de afectados por represas: el ya mencionado MAB. Un conflicto emblemático y mediático en los últimos años en la Amazonía brasileña ha sido el de Belo Monte. Es uno de los megaproyectos hídricos con mayor cobertura mediática y resistencia, que manifiesta de forma paradigmática el poder de la articulación y presión internacional de las ONGs comprometidas con estas resistencias, probablemente potenciada por el papel de la región amazónica en la geopolítica mundial. Belo Monte sería la mayor central hidroeléctrica en Brasil y la tercera a nivel mundial, desde el punto de vista de la potencia final instalada (11.233 MW).

La lucha en la Amazonía en contra de los megaproyectos tuvo como mecanismo principal una estrategia mediática de importante contenido científico, que posibilitó que la información sobre los planes y las afectaciones, llegara a sectores dentro de la selva de difícil acceso. De tal manera que la información sobre los proyectos se pudo difundir a través de los medios de comunicación, colocándola a disposición del público en general, pero sobre todo de las propias comunidades afectadas, con lo cual, tanto la comunidad científica-académica, así como los medios de comunicación, de alguna manera contribuyeron a generar cierta horizontalidad en el manejo de la información sobre proyectos, políticas y programas de afectación para las comunidades amazónicas (Cummins, 1995).

En cuanto a las acciones colectivas realizadas en el contexto de las luchas en contra de los megaproyectos hidroeléctricos en la Amazonía, se llevaron a cabo marchas locales, nacionales e incluso hasta en Nueva York (con Sigurney Weaver); ocupación de las oficinas de la empresa constructora para parar las obras; bloqueos de acceso a las obras por parte de los pescadores; ocupaciones de otros espacios públicos en distintos puntos del país; protestas públicas contra concejales que apoyan la obra; expulsión de investigadores que realizan los estudios de impacto ambiental; y un Twitazo ‘Acto Mundial en 140 Caracteres’.

La campaña contra Belo Monte incluyó además una gira de líderes indígenas por Europa, y logró la adhesión de figuras internacionales como el músico Sting y el expresidente de Francia Jacques Chirac, que llevaron a la reformulación y postergación de la obra. Por su parte, en Brasil, una de las principales acciones colectivas que los grupos indígenas afectados por Belo Monte han llevado a cabo, consistió en tomar las instalaciones de las empresas constructoras de la represa, lo que implicó la suspensión de las actividades en varias ocasiones, con la convocatoria a la prensa nacional. A partir de estas acciones se hizo un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial para que se respetara la consulta previa e informada, entre otros reclamos.

Belo Monte fue enfrentado por el MAB junto a otras redes y movimientos. La atención se centró en la ciudad de Altamira. La página electrónica del MAB (MAB, 2014) muestra cómo la resistencia a Belo Monte se ha venido articulando con otras luchas, como la de las recientes movilizaciones en Brasil por demandas de mayor inversión social y menos gasto en obras que no alcanzan a los grupos desfavorecidos (contra la Copa del Mundo 2014 y el aumento del costo del transporte público). En este caso en Altamira, la ciudad más directamente afectada por Belo Monte, una reciente movilización bautizada como ‘#DireitosJá’ (Derechos Ya) demandaba al gobierno con propuestas concretas en los ámbitos de salud, vivienda, educación, cultura, infraestructura, seguridad y transporte colectivo.

Consideraciones finales

En este trabajo partimos de retomar lo planteado por Patrick McCully, quien destaca que los múltiples conflictos en torno a los megaproyectos hídricos han llevado a la articulación de un amplio movimiento mundial de afectados o posibles afectados, que comprenden que la lucha no es particularmente en contra de la construcción de un megaproyecto específico, sino que es en contra de una política hídrica mundial y en contra del paradigma de gestión del agua vigente, así como de proyectos regionales en América Latina que impactan a varios países. Es decir, que las diversas formas de organización y reunión, han surgido de distintas estrategias de actuación coordinadas, con el objetivo de denunciar los efectos y afectaciones del paradigma neoliberal o neodesarrollista que prima actualmente en la gestión de aguas. Esta lógica de resistencia contrasta

con la percepción frecuentemente expresada por los promotores de estos proyectos, cuando plantean que las resistencias no son nada más que expresiones del síndrome NIMBY (en inglés, ‘not in my back yard’).

Desde esta perspectiva, se puede observar que existen vínculos sociopolíticos de carácter global, con demandas incluyentes, en donde la participación no se limita a los etiquetados como afectados y a los tradicionalmente reconocidos usuarios del agua. Se trata de movilizaciones sociales organizadas en diferentes escalas y muchas de ellas vinculadas y con trabajo en red, por ello la noción de ‘resistencias’ nos permite abarcar la complejidad de casos existentes en América Latina. Ello también cobra importancia en cuanto a la articulación de demandas diversas. Por ejemplo, existen ONGs que participan activamente de los conflictos, y coordinan su accionar con otros grupos sociales que reúnen a los afectados, cuyas demandas en muchos casos no nacen con una motivación exclusiva de defensa de causas ambientales, sino que denuncian la falta de compensación y los efectos de la relocalización y las promesas laborales incumplidas.

Así, estos conflictos nuclean a una diversidad de actores, como los afectados locales con ONGs de reconocidas trayectorias a nivel nacional e internacional, que además aportan capacidad técnica de llevar adelante demandas legales, de solicitar informes e intervención a los organismos del Estado (como, por ejemplo, Defensorías o Contralorías), de presionar a los legisladores para que pidan informes al Poder Ejecutivo, y de apelar a organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o tribunales éticos. Esta heterogeneidad en su composición, se refleja directamente en sus acciones colectivas y en las estrategias sociopolíticas que estos grupos despliegan para impedir o modificar la realización de los megaproyectos. Estas acciones varían a lo largo del proceso de estudios de factibilidad e implantación de las obras, e incluso continúan luego de haberse puesto en funcionamiento las represas.

Se concluye también, que las redes cobran importancia para visibilizar conflictos, brindar apoyo y protección a sus integrantes y denunciar abusos. En este sentido, observamos cómo los reclamos que éstas sostienen toman fuerza en determinados momentos – como en el contexto pre-copa del mundo 2014 en Brasil – y se articulan con aquellos que piden que las inversiones estatales se dirijan hacia mejoras sociales más amplias (servicios básicos) y no hacia estas megaobras, proponiendo incluso una mayor redistribución de los beneficios.

Finalmente, nos parece muy importante resaltar la evolución del reconocimiento de las afectaciones sociales y ambientales de los proyectos hidroeléctricos denunciados por las resistencias y actualmente reconocidos por organismos internacionales, algunos de los cuales financian megaproyectos hídricos. La ampliación de la figura de los afectados es un elemento clave en la organización y trabajo de diversos colectivos que conforman las resistencias así como el involucramiento de sectores más urbanos. Esperamos entonces que este trabajo constituya un aporte al estudio y clarificación de estos procesos y consideramos necesario continuarlo y ampliarlo, incluyendo particularidades de otros países que por ahora no fueron abordadas.

* * *

Anahí Copitzky Gómez Fuentes <anahi.copitzky@hotmail.com> es doctora en Ciencias Sociales, por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Es profesora e investigadora en El Colegio de Jalisco. Desde el 2012 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Sus temas de investigación están centrados en los movimientos sociales por el agua y la defensa del territorio; y los impactos socioculturales por la construcción de represas. Entre sus publicaciones se encuentran los libros: *Agua y desigualdad social. El caso de las indígenas mazahuas en México* (Editorial Catarata / UNESCO Etxea, 2010), y *Territorio y resistencia social. La lucha en contra de la construcción de presas y trasvases* (Aragón, 1985-2010) (El Colegio de Jalisco, 2012).

El Colegio de Jalisco
5 de Mayo No. 321
Zapopan, Jalisco
CP 45100 México

Lucrecia Wagner <lucrewagner@gmail.com> ha sido becaria post-doctoral del CONICET, docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Universidad de Congreso (Mendoza) y Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Participa de proyectos de investigación en la UNICEN y en la UNCuyo. Actualmente se desempeña como consultora ambiental. Sus principales enfoques de investigación son los conflictos socioambientales, movilizaciones sociales y evaluaciones de impacto ambiental, principalmente relacionados a la megaminería y al agua. Sus publicaciones recientes incluyen el libro *Conflictos socioambientales: La megaminería en Mendoza, 1884-2011*, editado por la Universidad Nacional de Quilmes (en prensa), y el artículo ‘Discursos de lo social en problemáticas ambientales: Agua y minería en el centro-oeste argentino’, en *Ambiente & Sociedad* (2014, en coautoría con Leticia Saldi y Diego Escolar).

IANIGLA CCT Mendoza
Av. Ruiz Leal s/n Parque General San Martín
CP 5500 Argentina

Beatriz Torres Beristain <betorres@uv.mx> es investigadora en la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, México. Ha publicado varios artículos científicos y de divulgación relacionados con la calidad y problemas asociados a la gestión del agua. Actualmente se encuentra trabajando en relación a problemáticas ambientales y sociales asociadas al agua. Entre sus publicaciones destacan el artículo ‘Contributions Towards an Ecosystem Based Management Of Lake Titicaca’, en *Aquatic Ecosystem*

Health & Management (2013), y el libro, *Desarrollo de las Metrópolis Veracruzanas, 2000-2010, Tomo III*. Administración Ambiental Biblioteca Digital de la Universidad Veracruzana (2014).

Dirección General de Investigaciones
Universidad Veracruzana
Dr. Luis Castelazo Ayala s/n,
Col. Industrial Ánimas
CP 91190 Xalapa, Veracruz, México

Facundo Martín <fdmartingarcia@gmail.com> es profesor-investigador en el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Su principal área de investigación es la ecología política del agua, con un enfoque en las relaciones entre agua, poder y territorios en tierras secas. Sus recientes publicaciones incluyen el artículo ‘Conocimientos y conflictos. Excavando los legados coloniales del extractivismo contemporáneo’ en *Geograficando* (2013), y el capítulo de libro, junto con Lucrecia Wagner, ‘Agua o minería. Determinaciones y movilizaciones en la construcción pública del conflicto ambiental en Mendoza’, en *Cartografías del conflicto ambiental en Argentina*, editado por Gabriela Merlinsky (CLACSO-CICCUS, 2013).

Departamento de Geografía
Universidad Nacional de Cuyo
Centro Universitario, Ciudad de Mendoza
Provincia de Mendoza
CP M5502JMA Argentina

Facundo Rojas <frojas@mendoza-conicet.gob.ar> es investigador en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), en Mendoza, Argentina. Es profesor de Epistemología de la Geografía, en la Universidad Nacional de Cuyo. Sus principales áreas de investigaciones son el estudio de los procesos históricos de uso y apropiación de recursos naturales y la vulnerabilidad social asociada a los procesos de variabilidad climática e hidrológica. Sus recientes publicaciones incluyen los artículos ‘Climatic variations in the Cordillera de Los Andes and their consequences over the environmental and social processes in the Mendoza Northern Oasis, Between the 19th and 20th Century’, en *Climate of the Past* (2012); y ‘Rol de la minería y el ferrocarril en el desmonte, del oeste riojano y catamarqueño (Argentina), en el período 1850-1940’, en *Población y Sociedad* (2013).

Grupo de Historia Ambiental y Antropología
IANIGLA CCT Mendoza
Av. Ruiz Leal s/n Parque General San Martín
CP 5500 Argentina

Agradecimientos: La primera versión de este documento fue presentada en octubre de 2013 en el marco de las sesiones de trabajo del grupo Agua y Megaproyectos de la V Reunión de la Red Waterlat en Quito, Ecuador. Agradecemos a los participantes sus aportaciones y reflexiones. Especialmente le damos las gracias a Alex Latta por los comentarios, las sugerencias y las contribuciones que nos brindó durante todo el proceso de construcción de este artículo.

Bibliografía

- AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente) (2009). *Grandes represas en América, ¿Peor el remedio que la enfermedad? Principales consecuencias ambientales y en los derechos humanos y posibles alternativas*. En línea, <http://www.aida-americas.org/> (consultado 2014-08-20).
- Arach, O. (2002). Ambientalismo, desarrollo y transnacionalidad en Paraguay. Consideraciones a partir de las protestas sociales en torno a la represa de Yacyretá. *Cuadernos para el Debate*, 16: 5-46.
- Barabas, A., y Bartolomé, M. (1992). Antropología y relocalizaciones. *Alteridades*, 2(4): 5-15.
- Bregannolo, R. (2002). Misiones: historia de la lucha contra la represa de Corpus, a 6 años del no más positivo. *La TierraSinMal*. En línea, <http://eco21.com.ar/misiones-historia-de-la-lucha-contr-la-represa-de-corpus/> (consultado 2013-09-21).
- Carruthers, D. (1996). Indigenous ecology and the politics of linkage in Mexican social movements. *Third World Quarterly*, 17(5): 1007-28.
- Castro, G. (2004). Nació MAPDER ¡El agua es nuestra, las represas la secuestran! *EcoPortal.net*. En línea, http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Agua/Nacio_Mapder_!El_Agua_es_Nuestra! (consultado 2014-01-10).
- (2005). El movimiento social en Mesoamérica por la defensa de los recursos naturales. *OSAL* 6(17): 41-51.
- (2006). El agua y los ríos amenazados en México. Los retos para el Movimiento Social Anti-Represas. *OSAL* 7(21): 159-172.
- CENDHA (2001). *Solicitud al Sr. Defensor del Pueblo de la Nación, Doctor Eduardo Mondino*. En línea, <http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/english/toc.html> (consultado 2013-09-21).
- Chaneton, J. (2005). *Dios y el diablo en la tierra del viento. Cristianos y Marxistas en la huelga de El Chocón*. Buenos Aires: Catálogos.
- Comisión Mundial de Represas (2000). *Represas y Desarrollo: Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones*. Londres: Earthscan.
- Corporación Financiera Internacional (2005). *Manual para la preparación de un plan de acción para el reasentamiento*. Washington, DC: World Bank. En línea, <http://go.worldbank.org/8Y TSAHC210> (consultado 2014-01-17).
- Cummings, B. J. (1995). Dam the rivers, damn the people: Hydroelectric development and resistance in Amazonian Brazil. *GeoJournal*, 35(2): 151-60.
- Dimitriu, A. (2002). Producir y consumir lugares: Reflexiones sobre la Patagonia como mercancía. *Eptic*, 4(3): 68-99.
- López, R. (2001). El reasentamiento de los afectados por el proyecto hidroeléctrico Zimapán. En J. M. Macías (Comp.) *Reubicación de comunidades humanas. Entre la producción y la reducción de desastres* (pp. 97-105). Colima: Universidad de Colima.
- Keck, M., y Sikkink, K. (1998). *Activists beyond borders. Advocacy network in international politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

- La Nación* (1996). Serio rechazo a la represa de Corpus. En línea, <http://www.lanacion.com.ar/167532-serio-rechazo-a-la-represa-de-corpus> (consultado 2013-09-21).
- (2006). Cortan el puente que une la Argentina con Paraguay. En línea, <http://www.lanacion.com.ar/806279-cortan-el-puente-que-une-a-la-argentina-con-paraguay> (consultado 2013-09-21).
- (2013). Represas de Santa Cruz: la mayor obra energética del país sigue demorada. En línea, <http://www.lanacion.com.ar/1573587-represas-de-santa-cruz-la-mayor-obra-energetica-del-pais-sigue-demorada>, (consultado 2013-09-21).
- Lindner, M. (2013). La historia y los discursos sociales. Yacyretá, un estudio de caso. *Actas XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia*.
- Lins, R. (2007). Poder, redes e ideología en el campo del desarrollo. *Tabula Rasa* 6: 173-93.
- MAB (2014). Movimento dos Atingidos por Barragens. En línea, <http://www.mabnacional.org.br> (consultado 2014-08-01).
- (2013). *Populações Atingidas por Barragens*. Movimento dos Atingidos por Barragens. En línea, <http://www.mabnacional.org.br> (consultado 2014-08-01).
- MAPDER (2014). *Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos*. En línea, <http://www.mapder.lunasexta.org/> (consultado 2014-01-17).
- McCully, P. (2004). *Ríos silenciados. Ecología y política de las grandes represas*. Santa Fe: Fundación Proteger.
- Página 12* (2007). Los desplazados por Yacyretá. En línea, <http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-86763-2007-06-18.html> (consultado 2013-09-21).
- Primera Edición* (2010). Se conformó la Mesa Coordinadora por Garabí. 18 de diciembre. En línea, <http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/digital/28202/se-conformo-la-mesa-coordinadora-por-garabi.html> (consultado 2013-09-21).
- Quintar, J. C. (1998). *El Choconazo*. Nueguén: Educo-UNCO.
- REDLAR (2014). Red Latinoamericana Contra las Represas. En línea, <http://www.redlar.net> (consultado 2014-08-01).
- Rights Action (2005). *Investigación Social de Comunidades Afectadas por la Represa Chixoy. Informe de Rights Action como parte de la Campaña para Reparaciones por la Represa Chixoy en coordinación con la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Repesa Chixoy*. Guatemala. En línea, <http://www.derechos.net/adivima/> (consultado 2013-24-08).
- Rothman, F. (2001). A comparative study of dam-resistance campaigns and environmental policy in Brazil. *Journal of Environment and Development*, 10(4): 317-44.
- Vainer, C. B. (2008). Conceito de 'Atingido': uma revisão do debate. *Vidas Alagadas-conflitos socioambientais, licenciamento e barragens*, 1: 39-63.